**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO**

**DEL VALLE DEL CAUCA**

**Auto Interlocutorio**

**RADICADO 76001-33-33-000-2020-00284-00**

**DEMANDANTE: DE OFICIO**

**AUTORIDAD: MUNICIPIO DE BUGA**

**MEDIO DE CONTROL CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD DECRETO No. 048 DE 2020**

**ASUNTO**: **NO ASUME EL CONOCIMIENTO**

**MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO**

Santiago de Cali (V.), treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020).

1. **ANTECEDENTES**

El Municipio de Buga remitió, vía electrónica, el Decreto 048 del 18 de marzo 2020, con el fin de que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca asumiera el control inmediato de legalidad de que trata el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, correspondiéndole por reparto, el asunto a este Despacho.

1. **CONSIDERACIONES**

El artículo 214 de la Constitución Política establece cuales son las disposiciones a las que se deben someter los estados de excepción y también indica la prohibición de suspender los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Por su parte el artículo 215 Ibídem, autoriza al Presidente de la Republica a declarar el estado de emergencia cuando se presenten circunstancias distintas a las previstas en los artículos 212 y 213 ibídem, que perturben o amenacen en forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país o que constituyan una grave calamidad pública.

Una vez efectuada la declaratoria, el presidente puede expedir decretos legislativos, que tienen que estar suscritos por todos los ministros y deberán referirse a materias que guarden relación directa y específica con el Estado de Excepción.

Ahora bien, el Congreso de la Republica expidió la Ley 137 de 1994 “Ley estatutaria de los Estados de excepción” y en su artículo 20[[1]](#footnote-1) indicó que las medidas de carácter general que sean dictadas en ejerció de la función administrativa y en desarrollo de los Decretos legislativos durante los Estados de excepción, tendrán control de legalidad inmediato por parte de la autoridad de lo contencioso administrativo del lugar donde se expidan si se trata de entidades territoriales o por el Consejo de Estado si emanan de autoridades nacionales.

El control de legalidad al que hace referencia el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 fue desarrollado en el artículo 136 del CPACA[[2]](#footnote-2), que, además, aclaró que la autoridad judicial debía asumir de oficio el conocimiento del asunto, en caso de que la entidad administrativa no efectuare el envío del acto sujeto a control.

De conformidad con las normas mencionadas, los actos administrativos que están sujetos a control inmediato de legalidad deben cumplir las siguientes dos características: **i)** ser de carácter general y **ii)** ser expedidos en desarrollo de los Decretos legislativos expedidos por el presidente de la República, es decir, debe contener disposiciones tendientes a la ejecución o aplicación del Decreto legislativo.

Ahora bien, por medio de Decreto 417 de 2020, el presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica con el fin de asistir la crisis económica y social derivada de la pandemia Covid-19, y en virtud de ello ha expidió varios Decretos legislativos.

En el presente asunto y de la revisión del contenido del Decreto No.048 del 18 de marzo de 2020, expedido por el Municipio de Buga, “*POR EL CUAL SE ADOPTAN LAS MEDIDAS SANITARIAS Y ACCIONES TRANSITORIAS DE POLICÍA PARA L PRESERVACIÓN DE LA VIDA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO CON OCASIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) EN GUADALAJARA BUGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIÓNES*”, se observa que dicho Decreto no fue expedido en desarrollo de la declaratoria del estado de emergencia, económico, social y ecológica establecida en por el Presidente de la Republica ni con fundamento en ningún Decreto legislativo expedido por el Gobierno Nacional en torno a dicha declaratoria, pues el Decreto Municipal se sustenta en la situación de calamidad pública por la que atraviesa el Municipio de Buga por el COVID -19 y en algunas disposiciones Departamentales.

Además, al revisar la literalidad del Decreto en mención se observa que en este se toman medidas de prevención y control para evitar la propagación del virus en el Municipio de Buga, el cual tiene sustento en lo establecido en las Resoluciones 380 del 10 de marzo y 385 del 12 de marzo ambas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección social, con el fin de adoptar medidas sanitarias para evitar la propagación en el país, también se estableció el toque de queda en el Municipio de Buga del 18 de marzo al 30 de abril de 2020 y se establecieron políticas sanitarias para evitar la propagación del COVID 19, medidas que no guarda relación con ningún Decreto Legislativo de emergencia económica, social y ecológica, sino con disposiciones administrativas que se adoptan al interior del Municipio, razón por la cual, a juicio del Despacho, en el presente asunto no resulta procedente adelantar control inmediato de legalidad al Decreto 048 de 2020, pues las medidas adoptadas en el mismo se hicieron en cumplimiento del artículo 315 de la Constitución Política[[3]](#footnote-3), en concordancia con las atribuciones otorgadas a los Alcaldes en Ley 136 de 1994[[4]](#footnote-4) y si bien es cierto el Decreto Municipal guarda relación con el Covid-19, no es menos cierto que este aspecto no lo convierte, *per se*, en ser susceptible de control inmediato de legalidad, pues, como se expuso en líneas anteriores, es necesario que haya sido expedido en desarrollo de un Decreto legislativo.

Por lo anterior, el Decreto No. 048 del 18 de marzo de 2019 remitido por el municipio de Buga no es susceptible del control inmediato de legalidad de que tratan los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio de que pueda ser demandado a través de los demás medios de control que prevé el CPACA. Por consiguiente, el Despacho no asumirá el conocimiento del mismo, por las razones expuestas.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sala unitaria,

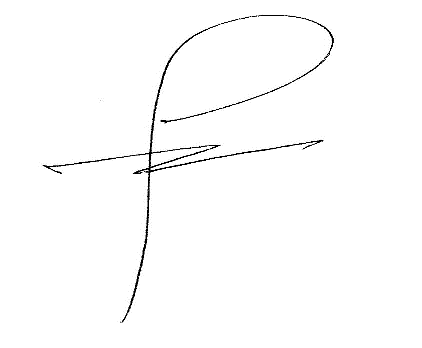
**RESUELVE:**

**PRIMERO: NO ASUMIR EL CONOCIMIENTO** del control inmediato de legalidad del Decreto 048 de 2020, expedido por el Municipio de Buga, por las razones expuestas en este proveído.

**SEGUNDO:** Por secretaría, **NOTIFICAR** esta providencia por vía electrónica a la autoridad remitente (Municipio de Buga) y al Ministerio Público. Además, **ORDENAR** que esta providencia se publique en la página web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocimiento de la comunidad.

**TERCERO:** Una vez ejecutoriada esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente, previas las anotaciones de rigor.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**JHON ERICK CHAVES BRAVO**

**Magistrado**

1. ARTÍCULO 20. CONTROL DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. [↑](#footnote-ref-1)
2. ARTÍCULO 136. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento. [↑](#footnote-ref-2)
3. Artículo 315. Son atribuciones del alcalde:

   (…) 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. [↑](#footnote-ref-3)
4. Artículo 91. Funciones. (…) Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

   (…) d) En relación con la Administración Municipal:

   1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.

   7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y dictar los actos necesarios para su administración. [↑](#footnote-ref-4)